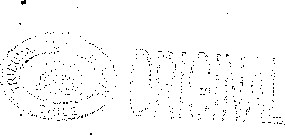
EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD•, E

PRIMER OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DECISIÓN URGENTE; EL TERCER OTROSÍ: SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO; EN EL CUARTO OTROSÍ: PERSONERÍA Y PATROCINIO.

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Daniel Huerta Cordero, abogado, en representación, según se acreditará, de la Asociación de la Industria del Salmon de Chile A.G.•, persona jurídica del giro de su denominación; y de Ausfralis Mar S.A.% Cultivos Yadrán S.A.', Empresas AquaChi1e S.A., Granja Marina Tornagaleones S.A., Piscicultura Aquasan S.A.,

Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones Camanchaca S.A.' y Salmones Friosur S.A., personas jurídicas del giro de la producción de salmones de cultivo, todos domiciliados para estos efectos en Cerro El Plomo NP 5420, Of. 903, comuna de Las Condes, Santiago, a SS. Excma. con todo respeto digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, no 6, e inciso undécimo, de la Constitución Política de la República, y en los artículos 31 y 79 y siguientes de la Ley NO 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, vengo en solicitar a S.S.E. se sirva declarar la inaplicabilidad, por causa de inconstitucionalidad, del inciso segundo del artículo 5 0 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la Ley NO 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en adelante "Ley de Transparencia", toda vez que de ser aplicada en la resolución del recurso de queja Rol NO 34.432-2016, en actual tramitación ante la

1

Corte Suprema, se producirá la infracción de Io prescrito en el artículo 80, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

El texto de la disposición legal cuya inaplicabilidad se requiere es el siguiente:

Inciso segundo del artículo 5 0 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso la Información de la Adminisfración del Estado, contenida en el artículo primero de la Ley N O 20.285: "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

I. Resumen ejecutivo

El presente requerimiento de inaplicabilidad tiene por oyeto evitar que se resuelva la gestión pendiente que le sirve de antecedente, dando aplicación a la disposición legal citada precedentemente, toda vez que esta aplicación produce un efecto inconstitucional, consistente en contrariar o exceder el contendido normativo del artículo 80 de la Constitución Política.

Se trata, en definitiva de evitar la aplicación a un caso concreto de una norma que en abstracto es perfectamente constitucional, pero que en la especie produce un efecto tal que contraviene los límites de una norma constitucional al compeler u obligar a mis representados a entregar información que no está cubierta por la

publicidad prescrita en el precepto constitucional señalado (artículo 8 0).

2

Concretamente, el contexto en que se pretende evitar dicha aplicación está constituido por una contienda relativa a un requerimiento de información que obra en poder de la Administración.

La inconstitucionalidad de la disposición legal, como se argumentará a lo largo de esta presentación, está constituida porque en su aplicación al caso concreto genera el efecto de traspasar los límites que el inciso segundo del artículo 8 0 de nuestra Constitución Política fija a la publicidad de los actos y resoluciones emanados de los órganos del Estado.

Como concluiremos, el artículo 80, inciso segundo, de la Constitución, así como su historia fidedigna, fijan un límite preciso a la publicidad que está constituido por actos, resoluciones, fundamentos de estos o documentos que consten en un procedimiento administrativo. Este claro sentido y alcance del precepto constitucional pugna con el resultado que se obtendría de la aplicación del precepto impugnado a la resolución de la gestión pendiente, y que consistiría en concluir que toda información o antecedentes que obre en poder de la Administración es pública.

II. Admisibilidad del presente requerimiento.

Como cuestión preliminar, y a fin que US. Excrna. pueda llevar adelante la tramitación. de este recurso, pasaremos revista a cada uno de los requisitos de admisibilidad del presente requerimiento conforme lo exige el inciso undécimo del artículo 93 de la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal

Constitucional:

3

1.- Legitimación activa: Este recurso Io planteo en representación de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G., y de las empresas Ausfralis Mar S.A., Cultivos Yadrán S.A., Empresas AquaChile S.A., Granja Marina Tornagaleones

S.A., Piscicultura Aquasan S.A., Productos del Mar Ventisqueros S.A., Salmones Camanchaca S.A. y Salmones Friosur S.A., que a la sazón tienen la calidad de recurrentes en los autos seguidos ante la Corte Suprema sobre Recurso de Queja bajo el Rol NO 34.432-2016, y que, como se expresará, constituye la gestión pendiente cuya existencia precede a este requerimiento.

2.- Precepto legal impugnado: Mediante este requerimiento se impugna el inciso segundo del artículo 50 de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso la Información de la Administración del Estado, contenida en el artículo primero de la Ley N O 20.285.

El texto impugnado fue reproducido al inicio de esta presentación a la que, por razones de economía procesal, nos remitimos. 

3.- Gestión pendiente: Como se expresó, la gestión pendiente en que se dará aplicación al precepto legal impugnado está constituida por los autos Rol N O 34.4322016, seguidos ante la Excma. Corte Suprema, en que se tramita un recurso de queja caratulado "Oceana Inc. con Consejo para la Transparencia".

4.- Carácter decisivo de la aplicación de la disposición legal impugnada para la decisión del recurso de queja: Conforme se detallará en el capítulo de "Antecedentes" de esta presentación, la gestión judicial pendiente que precede a este recurso tiene por objeto resolver si existió falta o abuso en la actuación de los ministros integrantes de la Segunda Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago

4



que, precisamente, dando aplicación a al precepto impugnado, ordenaron la entrega de información solicitada por don Alex Muñoz Wilson, por sí y en representación de Oceana Inc. al Consejo para la Transparencia.

En consecuencia, el carácter decisivo de la aplicación de la norma impugnadas está determinado por dos vías, a saber: A) Que la gestión judicial pendiente se genera con ocasión de un reclamo de ilegalidad seguido ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en que ya se dio aplicación de manera decisiva al precepto impugnado para la resolución del caso concreto; y, B) Que la gestión pendiente ante la E. Corte

Suprema tendrá por único objeto determinar si en su actuación los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago incurrieron en falta o abuso en la aplicación del derecho. Actuación que, como se expresó, consistió en resolver un asunto al amparo del precepto impugnado. Luego, la aplicación de este precepto a ese caso concreto será decisiva en el fallo de los autos Rol N O 34.432-2016, seguidos ante la Excma.

Corte Suprema.

5.- Fundamentos razonables del presente requerimiento: En los capítulos siguientes de esta presentación se desarrollarán pormenorizadamente los antecedentes, fundamentos y argumentos que, en opinión de nuestras representadas, determinan que este requerimiento de inaplicabilidad deba ser acogido en todas sus partes.

Con todo, y a modo de síntesis para efectos de la acreditación de este requisito de admisibilidad, deseamos expresar que la doctrina y argumentos que fundan la declaración de inaplicabilidad requerida están determinados por el claro tenor del artículo 80, inciso segundo, de nuestra Constitución Política de la República, así

5

como de los criterios interpretativos que quedaron plasmados en su historia fidedigna y también en la tramitación legislativa de la Ley N O 20.285.

En este sentido, el presente requerimiento se funda en la doctrina que sobre el tema tiene el Excmo. Tribunal Constitucional y que ha sido expresada en las sentencias Roles Nos. 2246/2012, 2153/2013, 2379/2013, 2558/2013 y 2689/2014.

Por lo expuesto, estimamos que el requisito de admisibilidad consistente en la existencia de un fundamento razonable para el recurso se encuentra debidamente cumplido.

III. Antecedentes del recurso

1) Solicitud de información vía fransparencia: Con fecha 12 de mayo de 2015, don

Alex Muñoz Wilson, por sí y en representación de Oceana Inc., solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en adelante indistintamente "Sernapesca", la siguiente información:

1. Informe sobre uso de antimicrobianos en la salmonicultura nacional correspondiente al año 2014; y,
2. Información desagregada por empresa y centro de cultivo, sobre cantidades y clases de antibióticos usados por la industria del salmón de cultivo durante el año 2014.

2) Naturaleza de la información solicitada: Es del caso tener presente que las empresas dedicadas al cultivo de salmones tienen diversas obligaciones relativas al desarrollo de su giro. Dentro de estas, las compañías salmonicultoras deben entregar al Sernapesca información sobre su situación sanitaria que, entre otras,

6

# 000 07

incluye las medidas terapéuticas aplicadas. Así está establecido por el artículo 7, N O 4, del Decreto NO 129, de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que establece el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura.

Esta información es entregada a Sernapesca a fin que este organismo cumpla con su obligación de llevar las estadísticas oficiales en materia de acuicultura, así como para cumplir sus requerimientos de fiscalización, según se advierte en los considerandos del citado decreto.

Concretamente, Sernapesca está sujeta a una obligación de transparencia activa, consistente en mantener en su sitio de dominio electrónico la información actualizada sobre uso de antimicrobianos, todo conforme lo dispuesto en la letra b) del artículo 90 quáter de la Ley de Pesca.

Finalmente, cabe precisar, con todo, que esa información debe ser mantenida conforme un cierto nivel de agregación que fija la misma letra b) referida: se debe mantener la información sobre uso de antimicrobianos, por cantidad y tipo, a nivel de agrupaciones de concesiones y no por empresa.

A objeto de contextualizar adecuadamente a S.S.E., hacemos mención a que las "Agrupaciones de Concesiones" corresponden a una categoría creada por la propia Ley de Pesca y cuya definición se contiene en el N O 52 de su artículo 2 0 como

'conjunto de concesiones de acuicultura que se encuentran dentro de un área apta para el ejercicio de la acuicultura en un sector que presenta características de inocuidad epidemiológicas, oceanográficas, operativas o geográficas que justifican su manejo sanitario coordinado por grupo de especies hidrobiológicas, así declarado por la Subsecretaría".

 7

En definitiva, la autoridad pone a disposición del público en general, la información sobre uso de antibióticos por el conjunto de la industria salmonicultora y también a nivel de "Barrios" o Agrupaciones de Concesiones de Salmonicultura.

1. Rechazo a la entrega de la información solicitada: En definitiva, Sernapesca se negó a la entrega de la información solicitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendida la oposición deducida por las empresas titulares de la información que fue requerida. Concretamente, las empresas argumentaron que dicha información forma parte de aspectos estratégicos de las mismas, por lo que su divulgación las pondría en riesgo desde un punto de vista competitivo y comercial.
2. Recurso de amparo por denegación de información: Frente a la negativa señalada en el número anterior, don Alex Muñoz Wilson, por sí y en representación de Oceana Inc., dedujo ante el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el "Consejo" o "CPLT", un reclamo por denegación de información.
3. Rechazo del reclamo: Con fecha 20 de octubre de 2015, en la causa Rol C1536-15, el Consejo adoptó la decisión mediante la que acogió parcialmente el reclamo por denegación de información deducido por don Alex Muñoz Wilson, decisión cuyos alcances importaron en la práctica un rechazo de su solicitud.

En efecto, la decisión del Consejo ordeno hacer entrega desagregada por empresa y centros de cultivo, sobre cantidades y clases de antibióticos usados por la industria del salmón de cultivo durante el año 2014, sólo en aquellos casos en que una

8

# 000009



empresa tenga la calidad de único titular de la misma concesión en un mismo barrio o agrupación de concesiones.

En consecuencia, el Consejo para la Transparencia denegó, en definitiva, la entrega de los antecedentes consistentes en información desagregada por empresa y centro de cultivo, sobre cantidades y clases de antibióticos usados durante el año 2014. Esta negativa se fundó en que su tuvo por acreditada la causal de reserva prevista en el artículo 21, NO 2, de la Ley de Transparencia, toda vez que los antecedentes requeridos constituían un bien económico estratégico para sus titulares, respecto del cual ejercen derechos de carácter comercial o económico, esto es, se trataba de un secreto empresarial de cada compañía en los términos previstos por el artículo 86 de la Ley NO 19.039, sobre propiedad industrial.

En su decisión, el Consejo estableció la concurrencia de todos los presupuestos necesarios para determinar que la información requerida constituía un secreto empresarial y que su divulgación produciría el efecto de dañar el interés jurídico protegido por la causal de reserva.

En efecto, conforme los antecedentes probatorios aportados, el Consejo para la Transparencia concluyó que se trataba de información secreta y respecto de la que cada titular efectuaba razonables esfuerzos para mantener tal carácter, es decir, los antecedentes son solo conocidos por cada empresa titular de la misma y si es entregada a Sernapesca Io es en cumplimiento de obligaciones legales.

En segundo lugar, se estableció por el Consejo que la información requerida tiene un valor comercial cuya reserva proporciona a su titular una ventaja competitiva y, correlativamente, cuya publicidad puede afectar significativamente el

9



## olZ%

desenvolvimiento competitivo de su titular. Esta afectación se produce, estimó el CPLT, porque la información sobre uso de antibióticos por parte de cada empresa constituye un "know-how" propio de cada una de ellas que comprende procesos de producción, técnicas y estrategias, recetas médicas, muestreo y condiciones económicas de propiedad exclusiva, y desarrollados exclusivamente por cada empresa.

1. Recurso de reclamación de ilegalidad: Con fecha 31 de mayo del presente año, la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en los autos Rol C11.771-2015, resolvió acoger el reclamo de ilegalidad deducido por la parte reclamante en contra de la decisión del Consejo de conformidad a Io previsto en el artículo 28 de la Ley de Transparencia.

Los Ministros de la I. Corte estimaron, en primer término, que la información objeto de la solicitud planteada por don Alex Muñoz Wilson era pública (primera parte del considerando 320 y considerandos 330, 340, 370 y 38 0).

Acto seguido, y como consecuencia de concluir que se trataba de información pública, estimaron que en el caso específico no concurría alguna de las causales de reserva previstas en la Ley de Transparencia, motivo por el cual, los antecedentes requeridos debían ser entregados al solicitante (segunda parte del considerando 320).

1. Fundamentos del fallo de la Corte de Apelaciones: Para efectos de lo que importa al presente requerimiento, vale consignar que la Corte fundó su conclusión sobre que la información solicitada era pública por las siguientes razones:

10

# 000011

7.1) Atendiendo, en primer término, al tenor del inciso segundo del artículo 5 0 de la Ley 20.285, que señala que ..es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

7.2) Porque conforme a las disposiciones citadas, en especial lo previsto en el inciso segundo del artículo 50 de la Ley N O 20.285, existiría un principio conforme al cual toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, de cualquier formato, soporte, fecha de creación, origen o clasificación o procesamiento es pública, a menos que esté sujeta a alguna de las excepciones señaladas, esto es, a alguna causal de reserva.

En síntesis, la Corte de Apelaciones ordena la entrega de los antecedentes requeridos como consecuencia de aplicar la disposición impugnada lo que permite establecer, a su turno, un principio de formulación prácticamente idéntica al precepto legal impugnado que prescribe que toda la información que los particulares han entregado a los órganos de la Administración deba ser pública como consecuencia precisamente de esa sola entrega.

8) Recurso de queja: Con fecha 6 de junio pasado, mis representadas dedujeron ante la Excma. Corte Suprema un recurso de queja en contra del fallo de la Corte de Apelaciones, cuya resolución se encuentra pendiente y que constituye el antecedente del presente requerimiento.

11



IV. Inconstitucionalidad de la aplicación del precepto impugnado

La aplicación del precepto impugnado por parte de la Corte de Apelaciones resulta contraria a la Constitución, toda vez que vulnera Io previsto en el artículo 8 0, inciso segundo, de nuestra Ley Fundamental. Esta inconstitucionalidad se mantendrá en caso que la Corte Suprema aplique la disposición impugnada. Por lo expuesto, el precepto legal en cuestión debe ser excluido de la resolución de la gestión pendiente con el objeto de evitar el quebrantamiento de la Carta Magna.

En este sentido, tal como expresamos en los capítulos II y III de esta presentación, el recurso de inaplicabilidad que en este acto se interpone viene precedido por una gestión judicial que, resolviendo un recurso de reclamación de ilegalidad, aplicó el precepto impugnado y, producto de tal aplicación, ordenó la entrega de información que, conforme los límites prescritos por nuestra Carta Fundamental, no puede de ninguna forma tener el carácter de pública.

De igual forma, la gestión pendiente que precede a este recurso de inaplicabilidad, el recurso de queja, tendrá por exclusivo objeto determinar si en la actuación de los Ministros de la Segunda Sala de la I. Corte de Apelaciones de Santiago existió falta o abuso, de manera tal que Io que fallará el Excelentísimo Tribunal podrá replicar lo decidido por el tribunal de alzada.

En síntesis, lo que planteamos en este requerimiento de inaplicabilidad es la confradicción entre el resultado de la aplicación de la norma impugnada en la resolución del caso concreto y los límites fijados por la Constitución Política de la

República a la publicidad de los actos administrativos.

12

En definitiva, el conflicto constitucional concreto, consiste en determinar si es constitucional que por aplicación del precepto reprochados se pueda decretar la publicidad de la información requerida por don Alex Muñoz Wilson.

¿Cómo se produce la inconstitucionalidad denunciada?

La inconstitucionalidad que fundamenta este reclamo se concretizará con el fallo de la gestión pendiente, cuando para su resolución los jueces podrán aplicar el precepto impugnado, emitiendo una resolución judicial cuyo contenido consistirá en imponer a mis representados la obligación de entregar información que a la luz de la Constitución Política no estarían obligados a hacerlo. 

Dicho de otra manera, la inconstitucionalidad se produjo cuando la resolución de la Corte de Apelaciones utilizó el precepto impugnado, aplicándolo, precisamente, para incluir la información relativa a antibióticos que el requirente solicita dentro de aquella que elabora la Administración, Io que pugna con la

Constitución. Esta inconstitucionalidad se producirá, de la misma forma, cuando la Corte Suprema valide, con similares fundamentos y razonamientos, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

¿Cuál es la inconstitucionalidad gue se produce por la aplicación de la norma impugnada?

En este caso particular, la inconstitucionalidad consiste en que con la aplicación de la norma impugnada se logra ampliar el abanico de antecedentes a los que se puede acceder vía Ley N O 20.285, puesto que no considera el límite fijado por nuestra

Constitución a la publicidad de las actuaciones de los órganos del Estado. Este

13

límite, para cuya exposición analizaremos el alcance normativo del precepto constitucional contrariado, está acotado a los actos y resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos y procedimientos como Io señala precisamente el artículo 80 de nuestro Código Político. Conforme las prescripciones del ya citado• artículo 80, inciso segundo, de nuestra Constitución, las solicitudes de información vía transparencia no pueden extenderse a cualquier información o antecedente que obre en poder de la Administración.

La inconstitucionalidad consiste en que en el caso concreto que motiva estos autos, se ha aplicado una disposición legal que determina la entrega de antecedentes que en ningún caso constituyen actos adminisfrativos ni documentos o información que sean complemento de ellos o que consten o formen parte del procedimiento seguido para su dictación.

En efecto, el Sernapesca recibe antecedentes relativos al uso de antibióticos por parte de las empresas productoras de salmón en su calidad de entidad encargada de su fiscalización, con el objeto de mantener esa información actualizada en. su sitio web. Es decir, no existe en el cumplimiento de esa obligación ningún tipo de acto administrativo, caracterizado típicamente por la existencia de una decisión o declaración de voluntad, expresada formalmente en un decreto supremo o resolución. Por el contrario, se trata simplemente de una obligación de transparencia activa, consistente en ejecutar un mero acto material de agrupar cierta información en un sitio web, labor que, como expresamos, no es el resultado de ningún tipo de declaración de voluntad del órgano (Sernapesca) y que formalmente no está manifestada por un decreto o resolución.

14

En definitiva, la información sobre uso de antimicrobianos que las empresas productoras de salmón entregan a Sernapesca son antecedentes que obran en poder de Sernapesca, pero que conforme lo previsto por el artículo 80, inciso segundo, de la Constitución no puede ser entregado a los particulares vía transparencia, pues excede de aquella información que está sujeta al principio de publicidad.

Por lo anterior, aplicar el artículo impugnado de la Ley NO 20.285 para ordenar su entrega resulta inconstitucional, lo que no puede ser tolerado por la Magistratura Constitucional.

Los argumentos arriba desarrollados se basan en los siguientes fundamentos de derecho:

IV.A) El contenido y alcance del artículo 80, inciso segundo, de la Constitución

Política de la República.

El texto constitucional:

La referida disposición prescribe que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

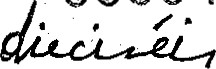
El criterio del E. Tribunal Constitucional:

Tal como lo ha señalado el Excmo. Tribunal Constitucional, aquello a lo que se puede acceder conforme el artículo 80 de la Constitución son actos, resoluciones,

15

fundamentos de estos o documentos que consten en un procedimiento administrativo (Considerando sexto STC 2558-13). El artículo 80—reitera en el considerando décimo de la sentencia citada— "no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino solo los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que utilicen".

La Historia del artículo 80 constitucional:

El alcance de la norma antes citada fluye no solo de su tenor literal, sino que así quedó claramente establecido en dos pasajes importantes de la historia de la reforma constitucional que dio origen al actual artículo 8 0 y que se resumen en el Considerando Noveno de la STC 2558-13 cuando señala, en primer lugar, que "se rechazó una indicación del ejecutivo que hacía públicos los informes y antecedentes que las empresas privadas que presten servicios de utilidad pública, proporcionen a las entidades estatales encargadas de su fiscalización y que sean de interés público". Acto seguido, en segundo término, el mismo fallo pone de relieve que en la tramitación de la reforma constitucional se eliminó parte del texto de la moción que dio origen a esa enmienda en la parte que hacía públicas las "actuaciones de los órganos del Estado y los documentos que obren en su poder".

En definitiva, la historia de la reforma constitucional delineó los límites de su alcance, dejando claro que no todo lo que obra en poder de la Administración es público, en especial, tratándose de antecedentes que los particulares entreguen a la Administración u otros que obren en su poder, así como de meras actuaciones que no sean actos administrativos (como es el caso de la obligación de mantener información en un sitio web). Por lo mismo, la Magistratura Constitucional concluyó que "la historia fidedigna de los preceptos apunta a restringir el acceso a

16

la información que las empresas privadas sujetas a fiscalización entreguen a las entidades que las controlen".

BI proyecto de modificación del artículo 8 0 de la Constitución:

Existe un proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el alcance del actual artículo 8 0, ampliando el universo de antecedentes a los que se puede acceder vía transparencia.

Esta enmienda en trámite no hace sino confirmar el sentido del artículo 8 0 vigente, alcance que hoy marca un límite a la transparencia, que en la resolución de la gestión pendiente de autos se quebranta por la aplicación de la disposición impugnada.

En efecto, a la fecha se tramita en el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional (Boletín 8805-07) que pretende ampliar el ámbito de alcance del analizado artículo 8 0, incorporando en esa disposición el principio de publicidad y de acceso a la información pública y modificando el numeral 12 del catálogo de derechos constitucionales, permitiendo a las personas el acceso a la información que pueda estar en manos de la Administración. Expuesto lo anterior, la lógica conclusión, como ha expresado el Tribunal, es que esta reforma busca incorporar un contenido que hoy no existe en la Constitución, motivo por el cual los antecedentes que obren en poder de la Administración no podrían ser objeto de publicidad hoy sin quebrar el precepto constitucional.

IV.B) La inconstitucionalidad del precepto impugnado.

17

En los párrafos precedentes esbozamos cuál era la inconstitucionalidad que se producía por la aplicación de la norma impugnada.

Tal como hemos explicado, la impugnación de autos está referida al inciso segundo del artículo 50 de la Ley de Transparencia que hace pública toda la "información que haya sido elaborada con presupuesto público o que obre en poder de la Administración".

'En el caso de la disposición impugnada, en su aplicación al caso pendiente de resolución, ella excede o contraviene lo dispuesto en el artículo 8 0 de la Constitución conforme el contenido que hemos descrito en el acápite anterior al incorporar el concepto de "Información" que resulta extraño a la Carta Fundamental y, por lo tanto, inconstitucional.

En ese sentido, tal como lo ha sostenido el Excmo. Tribunal Constitucional en sus sentencias STC 2246/2012, 2153/2013, 2379/2013 y 2558/2013, la Ley N O 20.285 introduce el concepto de "información", separándose de lo previsto en la Constitución. Es así como el concepto de "información" resulta extraño al precepto constitucional que discurre sobre la base de "decisiones" cuando habla de "actos",

'resoluciones", "fundamentos" y "procedimientos", por lo mismo, "información elaborada con presupuesto público" o "información que obre en poder de los órganos de la Administración" no tienen que ver con las categorías constitucionales.

Finalmente, en esta parte, cabe consignar que aplicar el artículo 5 0, inciso segundo, de la Ley de Transparencia en el sentido de extender el alcance de lo previsto en el artículo 8 0, nuevamente colisiona, ahora con Io historia fidedigna de la Ley N O

20.285, en que se mencionó que lo que se buscaba era reproducir lo que establecía la

18

Constitución y, además, no innovar en los conceptos de acto administrativo que definía la Ley NO 19.880 (Historia de la Ley N O 20.285, Biblioteca del Congreso

Nacional, páginas 117 y siguientes). 

IV.C) La afectación de derechos constitucionales.

La revelación de la información requerida vulnerará derechos constitucionales de mis representadas, garantizados por los numerales 21, 24 y 25 del artículo 19 de nuestra Constitución.

Para comprender esta circunstancia, cabe tener presente que quedó establecido en la Decisión del Consejo para la Transparencia (Rol C1536-15, considerando 11 0) que la información requerida se vinculaba con la competitividad de cada empresa salmonicultora, pues da cuenta de planificación estratégica de cada empresa productora de salmón que constituye un bien económico estratégico para la venta de sus productos, para cuyo desarrollo las empresas invierten recursos y que en definitiva constituye un secreto empresarial. 

Dicho lo anterior, tenemos que la revelación de la información producirá un menoscabo en el derecho de mis representadas a ejercer libremente sus actividades económicas (Art. 19 NO 21), pues se verán expuestas a la eventual competencia desleal de las empresas que conocerán aspectos propios de su planificación estratégica.

En segundo término, afectará su derecho de propiedad (art 19 NO 24), pues gran parte de las inversiones que efectúan para desarrollar la política de uso de

19

antibióticos serán aprovechadas por terceros quienes podrán nutrirse de la información generada con los recursos propios de quien invirtió en su desarrollo.

Y, finalmente, se lesionará el derecho de propiedad industrial (artículo 19 N O 25) al revelarse secretos empresariales desarrollados por cada una de las salmonicultoras y amparados por la Ley 19.039.

POR TANTO

Y en atención a lo dispuesto en el 93 de la Constitución Política de la República, artículos 79 a 92 de la Ley NO 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, y demás disposiciones constitucionales y legales aplicables,

RUEGO A SS. EXCMA. tener por interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 50, inciso segundo de la Ley N O 20.285, precepto legal que tiene efectos inconstitucionales en la gestión pendiente de la forma descrita en el presente recurso, en relación al recurso de queja interpuesto ante la Excma. Corte Suprema, Rol N O 34.432-2016, por resultar tal precepto contrario en su aplicación al inciso segundo del artículo 8 0 de la Constitución Política de la República, acogerlo a tramitación y en definitiva declarar su inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

PRIMER OTROSÍ: Sírvase S.S.EXCMA. tener por acompañados los siguientes documentos:

1) Copia de las siguientes escrituras en que consta mi personería para actuar en representación de las recurrentes:

20

1. Escritura pública de fecha 3 de mayo de 2011, otorgada en la notaría de Santiago de don René Benavente Cash, correspondiente a mandato judicial de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G.;
2. Escritura pública de fecha 16 de noviembre de 2015, otorgada en la notaría de Puerto Varas de don Bernardo Patricio Espinosa Bancalari, correspondiente a mandato especial de Australis Mar S.A.;
3. Escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2105, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Hernán Tike Carrasco, correspondiente a mandato especial de Cultivos Yadrán S.A.;
4. Escritura pública de fecha 3 de noviembre de 2015, otorgada en la notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, correspondiente a mandato especial de Empresas Aquachile S.A.;
5. Escritura pública de fecha 26 de octubre de 2015, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Hernán Tike Carrasco, correspondiente a mandato especial de Granja Marina Tornagaleones S.A.; 
6. Escritura pública de fecha 3 de noviembre de 2105, otorgada en la notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, correspondiente a mandato especial de Piscicultura Aquasan S.A.;
7. Escritura pública de fecha 26 de octubre de 2105, otorgada en la notaría de Puerto Montt de doña Lebby Carolin Barría Gutiérrez, correspondiente a mandato especial de Productos del Mar Ventisqueros S.A.;
8. Escritura pública de fecha 27 de octubre de 2015, otorgada en la notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, correspondiente a mandato especial de

Salmones Camanchaca S.A.;

1. Escritura pública de fecha 30 de octubre de 2105, otorgada en la notaría de Puerto Montt de don Hernán Tike Carrasco, correspondiente a mandato especial de Salmones Friosur S.A.

21

1. Copia de la Decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia con fecha 20 de octubre de 2015 en la causa Rol C1536-2015
2. Copia de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 31 de mayo de 2016 en los autos Rol C 11.7712015.
3. Copia del recurso de Queja deducido por nuestras representadas en contra del fallo señalado en el número anterior con fecha 6 de junio de 2016.

SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el inciso primero, N O 6, e inciso undécimo, del artículo 93 de la Constitución Política de la República, y cumpliéndose los presupuestos de la cautela, ya que sin la suspensión del procedimiento el tribunal de la gestión conocerá y resolverá el recurso de queja deducido, haciendo ilusoria la tutela judicial del derecho de la Constitución, vengo en solicitar que junto con ser acogido a tramitación el presente recurso, ese Excmo. Tribunal Constitucional se sirva decretar, a través de la sala que corresponda, la suspensión del procedimiento en que incide el presente requerimiento de inaplicabilidad, esto es, el recurso de queja Rol N O 34.432-2016, sustanciado ante la Excma. Corte Suprema, oficiándose al efecto.

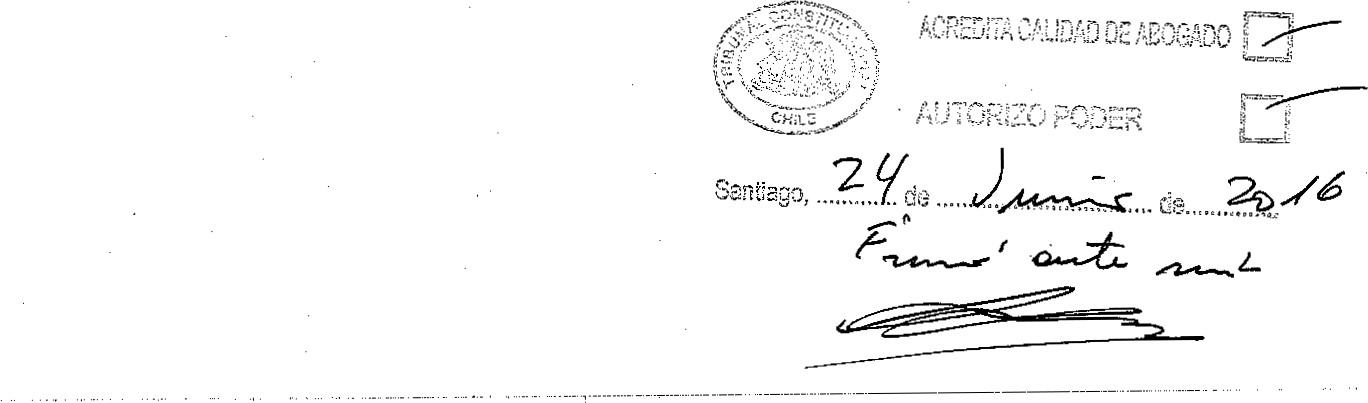
Atendida la inrninencia de la vista de la causa en el tribunal que conoce de la gestión pendiente, venimos en solicitar que el presidente del Tribunal requiera a la Sala para que conozca de la solicitud de suspensión de procedimiento de forma urgente, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3 0 del

22

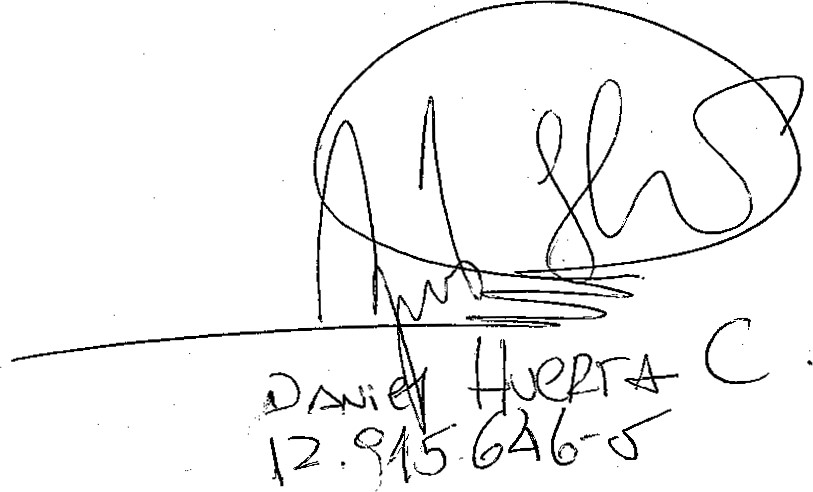
Auto Acordado sobre ingresos, formación de tablas y vista de las causas de ese Excmo. Tribunal.

TERCER OTROSÍ: En consideración a lo dispuesto en el artículo 42, inciso final, de la Ley NO 17,997, Orgánica Constitucional de ese Tribunal Constitucional, y a lo acordado por el Pleno de ese Tribunal, en sesión de 23 de octubre de 2014, en el sentido de aceptar peticiones de notificación por correo electrónico, solicito que las resoluciones que se dicten en el proceso de autos sean notificadas a los correos electrónicos que se indican:

dhc@ovalleycia.cl pmp@ovalleycia.cl jpca@ovalleycia.cl

CUARTO OTROSÍ: Sírvase US.Excma. tener presente que mi personería para actuar en representación de las recurrentes consta de las escrituras acompañadas en el número 1) del primer otrosí de esta presentación.

Además, que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, patrocino personalmente esta presentación, la que suscribo en tal carácter.



23